

*Luis Humberto Hernández\**

## El cómodo *impasse* de la paz en Colombia

**Fecha de recepción:** Octubre 23 de 2009

**Fecha de aprobación:** Noviembre 2 de 2009

### RESUMEN

El ensayo argumenta que la actual política de Seguridad Democrática, que ha copado hasta la fecha nueve años de la historia política Colombiana, se perfila reducida, estrecha y simplista; que la situación no es nada halagadora ni para el mantenimiento de la Política de Seguridad ni para el grueso de los colombianos, pues sus fisuras hacen suponer a las guerrillas que se están dando las condiciones objetivas que validan su lucha, manteniendo al país eternamente en el cómodo *impasse* (Nazih Richani) del conflicto, marcado por (i) el fracaso de las instituciones y los mecanismos políticos de mediación, (ii) un nivel de éxito de los antagonistas que se adaptan a él, pues establecen una "economía política positiva" que les permite considerar la guerra como la mejor opción disponible por el equilibrio de poderes y finalmente, (iii) un equilibrio de fuerzas entre los actores en conflicto que da como resultado este cómodo *impasse*.

**Palabras claves:** cómodo *impasse*, paz, conflicto, instituciones, seguridad democrática, Plan Colombia, economía política positiva.

### ABSTRACT

This essay argues that the current Policy of Democratic Security that has occupied nine years of Colombian political history is reductionist, narrow and simplistic; that this emerging situation threatens the stability of both Security Policy and the majority of Colombians because its weaknesses lead the guerrillas to suppose that the objective conditions are given for the validation of their actions, maintaining the country eternally in the comfortable *impasse* (Nazih Richani) of conflict, characterized by (i) the failure of democratic institutions and political mechanisms for mediation, (ii) a level of success of the antagonist parties that adapt themselves to this context while establishing a "positive political economy" that allows them to choose war as the best available option to maintain a balance of powers and finally, (iii) an equilibrium of forces among actors participating in the conflict that, as a result, leads to this comfortable *impasse*.

**Key-words:** Peace, Conflict, Institutions, Democratic Security, Plan Colombia, Positive Political Economy.

\* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

*Cuando en el Juicio de Núremberg le preguntaron al mariscal Goering como se las arreglaron para persuadir al pueblo alemán de que tenía que seguir fielmente las ordenes del Führrer, dijo: “Es muy simple, los convencimos de que estaban bajo amenaza, de que la nación alemana estaba en peligro de ser destruida de adentro por los judíos y de afuera por los bolcheviques.*

MARIO BUNGE

### 1. EL IMPASSE POR OTROS MEDIOS

El politólogo Norteamericano Nazih Richani, quien publicó un estudio juicioso sobre el conflicto colombiano titulado *Sistemas de Guerra* (2003), parte por considerar un *sistema de guerra* formado por tres ejes claves: 1) El fracaso de las instituciones y de los mecanismos políticos para mediar conflictos. 2) Un nivel de éxito de los antagonistas adaptándose al conflicto, al establecer una “economía política positiva” que les permite considerar la guerra como la mejor opción disponible por el equilibrio de poder y los altos costos de la paz, y 3) un equilibrio de fuerzas de los actores en conflicto que da como resultado un *impasse* cómodo. Estas características hacen presencia en el conflicto colombiano.

Respecto a la primera variable relacionada con el fracaso de las instituciones señala que la violencia en Colombia, que despunta desde los inicios del siglo XX, se explica en parte por el fracaso del Estado para juzgar y resolver los conflictos sociales, articulados con la distribución del ingreso y los recursos, especialmente en el sector agrario. Este fracaso se ve agravado por las disputas internas de la élite perpetuadora de una crisis hegemónica del Estado, que lleva a la disfunción de las instituciones, en concreto de su marco legal. De esa forma, al ser incapaz el Estado de construir instituciones aceptables con respaldo hegemónico para resolver los problemas, queda montado el escenario para mantener el conflicto y la violencia.

Este sistema de guerra, afirma Richani, se perpetua por obra y gracia de los militares, que escogen para su accionar una estrategia de contención y no una de eliminación de la guerrilla, llevando al cómodo *impasse* o dilatación del conflicto. Razón que se funda en la tesis según la cual las personas que forman parte de las entidades e instituciones del Estado articulan sus propias metas que a menudo realizan.

Los militares en Colombia se ven beneficiados del pacto frentenacionalista que les otorga una relativa autonomía al hacer de su competencia casi exclusiva los temas

de defensa y seguridad, lo que adquiere especial relevancia dada la debilidad inherente del Estado, debido a su crisis hegemónica.

En lo referente a su accionar militar su estrategia contrainsurgente es primordialmente de contención más que de guerra total cuyos principios son tomados de la Doctrina de Guerra de Baja Intensidad. Se basa en mantener a los grupos guerrilleros por fuera de las áreas económicas, controlar las áreas urbanas vitales, en la percepción de que la guerrilla no es una amenaza para la seguridad del Estado y la economía por operar en áreas rurales, tal como lo considera el Departamento de Estado de los Estados Unidos al sugerir limitar “el objetivo viable tanto para el gobierno colombiano como estadounidense a la contención en lugar de la eliminación” (Richani: 2003, 89).

Un triunfo sobre la guerrilla implica reducir su exagerado cuerpo administrativo<sup>1</sup>, que es el más codiciado, pues los cargos administrativos son la clave del ascenso en la jerarquía militar por ser el lugar donde se establecen las redes políticas. La situación lleva a la conclusión de que los militares reaccionan basados en la capacidad y en los recursos a su disposición adecuados a una estrategia de contención y no a partir de convicciones ideológicas de seguridad nacional, que define la ideología de los militares en calidad de guardianes del orden sociopolítico y constitucional.

Considera el autor en referencia que ese conjunto de factores predominantes en el campo militar del Estado contribuyen a la prolongación de la guerra civil, a la vez que le permite a la guerrilla tener una economía política positiva (EPP), al dotarse de unos activos políticos, militares y económicos importantes para mantener el *statu quo* en lugar de una victoria definitiva o un arreglo negociado. Eso por cuanto en un sistema el comportamiento de un actor sólo se puede evaluar en relación con su impacto sobre los comportamientos e incentivos de otros actores. De ahí que la prolongación del conflicto, su baja intensidad, y su no eliminación le permiten a la guerrilla establecer y mantener réditos económicos y control político y social sobre amplias zonas económicas lícitas e ilícitas donde ejercen la autoridad. El *impasse* ofrece la estabilidad al sistema de guerra y permite a los grupos guerrilleros y al Estado coexistir y acomodar sus estrategias a esas condiciones dilatando así el conflicto.

De esa manera

*Los grupos guerrilleros redimensionan sus estrategias para corto y mediano plazo. En lugar de tomar el poder político mediante la toma de los aparatos e instituciones del Estado central, optan por deconstruir el poder del Estado en pueblos y municipios, y desde ahí ascender* (Ibíd., 143);

<sup>1</sup> “Recordemos que la mayor parte de los gastos de defensa, más del 70%, se invierten en salarios, pensiones, mantenimiento logística, servicios médicos y vivienda, y menos del 20% en la modernización y en armamentos (...) para 1996 los salarios de los militares constituían el 1.5 del PIB, y representaban más del 35% de la nómina total del gobierno” (Richani: 2003, 85).

en consecuencia, sus resultados divergen de los intereses y metas iniciales o estratégicas, como suele suceder en el despliegue de los sistemas. El cómodo *impasse* les permite mantener sus logros políticos y ganancias económicas para llegar a una economía política positiva y contribuir así a la dilatación del conflicto.

A esa condición de resolución del impase se enfrenta la Política de Seguridad del presidente Álvaro Uribe.

Para tal fin parte por desconocer en el “plan de guerra”, llamado Plan Patriota, la existencia del conflicto armado interno, y define a la guerrilla como terrorista y narcotraficante en el marco de la generalización que de él hacen los Estados Unidos a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2002. Desconoce de esa manera el carácter político del conflicto y convierte las luchas políticas y sociales, y, a sus respectivos actores insurgentes, sindicalistas y líderes populares, en delinquentes comunes.

Con la ayuda norteamericana, y el impuesto de guerra fortalece y tecnifica a las fuerzas armadas, apuntando a la intensificación de la guerra.

*Cinco días después de la toma de posesión, decretó un estado de que ha permanecido en vigor ininterrumpidamente. Esto encomienda competencias civiles al ejército y suprime derechos civiles vigentes formales de manera fáctica. (...) poblaciones enteras fueron colocadas bajo el control directo del ejército como áreas especiales de seguridad denominadas “Zonas de rehabilitación y Consolidación” El gobierno inició a lo largo de todo el país la construcción de una red de informantes que debe incluir un millón de personas (parte de ellas provistas de armas de guerra) en las estructuras de información del ejército. Adicionalmente, el gobierno amplió el ejército de 168.000 soldados con 30.000 nuevos soldados campesinos, un tipo de protectores de aldeas, paramilitares legales que viven en las comunidades de origen (Azzellini: 2003, 63).*

Con los primeros éxitos de la política alcanzados por la fuerzas militares del Estado en el control en las carreteras, la disminución del secuestro y la contracción de las acciones guerrilleras, los grupos de paramilitares y del narcotráfico se disponen a entrar en negociaciones con el Presidente Uribe<sup>2</sup>. Estos grupos en los años noventa, en asocio con sectores militares, habían combatido a la guerrilla masacrando sus bases sociales de apoyo, medio por el cual hacen el trabajo de guerra sucia al Estado y dejan el campo expedito para la confrontación directa del aparato militar guerrillero por parte del militar del Estado, y su consolidación territorial.

<sup>2</sup> “Y como complemento a la recién aprobada prórroga de la ley de orden público, al iniciar 2003 el gobierno expidió el Decreto 128 para reglamentarla en materia de procedimiento para la desmovilización de las fuerzas irregulares, en concreto de los paramilitares” (Leal, 2006: 233).

A partir de entonces, esa política de guerra discurre en una curva ascendente de éxitos, unido al fortalecimiento de las fuerzas armadas y los golpes propinados a la guerrilla, que llega a su culminación con la Operación Jaque en el 2008 al liberar a la senadora Ingrid Betancur y tres Norteamericanos<sup>3</sup> en poder de las Farc. Esta operación se constituye en un punto de inflexión del nuevo *impasse* donde el conflicto, pese al debilitamiento de las guerrillas, tiende a volver a los cauces dilatados de antes del año 2000.

La cadena de exitosos golpes propinados a las Farc, que van desde la captura de Simón Trinidad, pasando por la muerte de Raúl Reyes y la desmovilización de Karina, hasta la Operación Jaque, llena de euforia a los militares y sectores guerrilleros del gobierno y mantiene lela a la opinión pública, al unísono crece la imagen de favoritísimo del Presidente en las estadísticas por la efectividad de su política de la Seguridad Democrática. Pero las dos operaciones más sonadas La Fénix y Jaque contabilizan un costo negativo potencial para el devenir del conflicto, la primera acarrea la violación de la soberanía ecuatoriana que generó la ruptura de relaciones con el gobierno de Presidente Rafael Correa y tensiones con sus presidentes aliados, en particular Hugo Chávez; y la segunda, la violación de la neutralidad de la Cruz Roja por el abuso del emblema de una institución de reconocimiento mundial.

La operación Jaque puso la política de seguridad en la cúspide exitosa de la confrontación con las Farc, que hacía suponer que la correlación de fuerzas militares desembocaría en la resolución del conflicto por la vía de la eliminación del enemigo y de esa manera acabar el cómodo *impasse* (García: 2008). Pero el éxito de la operación jaque no se acompañó de la operación Mate para golpear definitivamente a la cúpula de la guerrilla, es decir, que la Política de Seguridad no alcanza su objetivo estratégico, quedando lo logrado en un éxito táctico y, persistiendo la dilatación del conflicto como parecen corroborarlo los hechos posteriores.

La operación resulta paradójica. Inicialmente es un éxito militar rotundo para el Estado, seguida de un aminoramiento en sus acciones que no han resultado ni tan impactantes ni tan exitosas; eso hace que los medios de comunicación y la opinión pública entren en un estado de indiferencia y se ocupen de otros menesteres como los falsos positivos que comprometen a la fuerza militares, la crisis economía mundial y su repercusión en la economía interna, los negocios de los hijos del presidente, la pandemia del AH1N1 y la “chuzada” de los teléfonos de los opositores del gobierno y las Cortes, entre otros.

---

<sup>3</sup> El 13 de febrero de 2003, unidades de las Farc derribaron una avioneta Cessna 208 (...) A la tripulación pertenecía un miembro colombiano del servicio secreto y cuatro empleados estadounidenses de la CMP (Corporaciones Militares Privadas) California Microwave Inc., reclutados por la oficina de Administración Regional de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, una dirección fingida de la CIA (Azzellini: 2005, 41).

Para la Farc la operación les representa una derrota paradójica, que les descongestiona las tropas que no podían combatir por estar ocupadas en cuidar a los rehenes; a la vez les permite la dislocación de esas fuerzas que dificultan al enemigo su detección y aniquilamiento, y por último las apalanca militarmente para reactivarse, como lo ilustran sus recientes acciones.

La explicación de esa paradoja parece estar en el hecho de que “la joya de la corona”, el objeto del pulso militar entre el gobierno y las Farc, se concentró en las personas de Ingrid Betancourt y los tres estadounidenses, que habían comprometido a fondo los servicios secretos, técnicos y de apoyo financiero del Estado norteamericano, y de solidaridad por parte del gobierno de Francia. Una vez se dan las liberaciones estos gobiernos se desentendieron del asunto, de cuyo se comprende que los soldados y los oficiales retenidos no son su problema ni prioridad en el conflicto, como tampoco lo son para los demás liberados; lo que indudablemente incide en los altibajos que muestran desde entonces los operativos militares de la política de seguridad del Presidente Uribe<sup>4</sup>. En el mediano y largo plazo esas operaciones que aparecen en la coyuntura como exitosas resultan, en el mediano y/o largo plazo unos pírricos triunfos, o como afirma Samuelson de la economía mundial, “Nuestra geopolítica de éxitos temporales son seguidos por derrotas peores” (2008, 100).

Urgidos de la continuidad y mantenimiento en la campaña militar exitosa después de la operación Jaque, los militares la mantienen a través del incremento de los denominados falsos positivos, una actividad criminal que acompañaba de marras la lucha contrainsurgente, pero que se recrea con la masacre y asesinato de jóvenes –en un buen número habitantes de los barrios pobres de las ciudades–, que son presentados como miembros de las guerrillas dados de baja en operaciones contrainsurgentes<sup>5</sup>.

Esa situación, que implica la condena de militares<sup>6</sup>, pone en jaque la efectividad de la política de seguridad ahora cuestionada por la opinión pública, y conlleva

<sup>4</sup> “A su inicio, en el año 2002 el Gobierno de Uribe Vélez publicó la cifra de 20.600 rebeldes de todas las fuerzas presentes en Colombia. Hoy los informes del Ministerio de Defensa dan cuenta de 50.464 guerrilleros fuera de combate, entre abatidos, capturados y desmovilizados. (...) “se observa que el número de retirados de la guerrilla es superior al doble de la cifra inicial de combatientes regulares”. Se calcula entonces que de cada 100 subversivos retirados del conflicto, la guerrilla logró, en el “periodo Uribe” de 2002 a 2007 incorporar 84 nuevos combatientes, “lo cual hace surgir dudas sobre la eficiencia de la lucha” (Muñoz: 2009).

<sup>5</sup> “Desde que se inició la política de Seguridad Democrática, las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos del Ejército han aumentado exponencialmente. En un reciente oficio de la Dirección Nacional de Fiscalías se informa que a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de esta institución se le han asignado 37 casos sucedidos entre 1985 y 2001, y 901 entre 2002 y 2008. Dicho de otra manera, en los últimos siete años se han producido 24 veces más denuncias que en los anteriores 17. Y aunque las denuncias no son sinónimo de falsos positivos, el alto crecimiento en las mismas sí marca una tendencia” (elespectador.com: abril 26 de 2009).

<sup>6</sup> “... las estadísticas de la misma Fiscalía y el Convenio Colombia-Estados Unidos-Europa, indican que entre 1998 y 2009 se han presentado entre 1.500 y 2.000 casos de falsos positivos, la mayoría de los cuales no han sido denunciados. “Es inadmisibile que se diga que la responsabilidad del

su condena por parte de los organismos de defensa nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, que los considera objeto de sus tribunales por crímenes de lesa humanidad.

Pero igualmente empiezan a pesar en el ambiente y bolsillos de los colombianos los costos tozudos que implican estos triunfos, como la exigente condición económica para seguirla sosteniendo<sup>7</sup>, agravada por el ambiente que se vive de pronunciada recesión y desempleo, producto de la crisis económica generalizada.

De Perogrullo se sabe que el resultado de la guerra no solo reside y se determina por el tamaño y la efectividad de los ejércitos combatientes, sino por la capacidad de mantener el costo de la misma. Para sostener el conflicto, Colombia le ha destinado desde el gobierno de la Seguridad Democrática el 4,7% del PIB, dato que resulta inquietante si lo comparamos con todos los países de la Unión Europea que hacen parte de la OTAN, cuyo gasto militar llega, en casos extremos, al 2% de su PIB. De ese porcentaje se dedica a la lucha directa el 30%, el resto a los asuntos administrativos, manteniendo así el comportamiento histórico que caracteriza a las finanzas del *impasse*.

Esta economía política de la guerra, que acompaña centenariamente al conflicto, no es otra cosa que un sumidero de recursos improductivos, que ninguna mente económica sensata puede entender que prosiga. Una irracionalidad económica que sostiene a otra irracionalidad perniciosa como es el conflicto que padecemos, merece ser objeto de la crítica de la negociación. En las condiciones actuales, cualquier oposición a esa crítica no puede dejar de ser sospechosa.

Pero el pretendido régimen de la Seguridad Democrática entra en encrucijada con la crisis económica mundial que estalla en el último trimestre del 2008 y que por efecto dominó incide en la situación económica y social del país. De contera le da aliento a las aspiraciones de la FARC golpeadas en su accionar, para considerar que se le están dando las condiciones objetivas para su aspiración a la toma del poder, de esa manera nuestro sino histórico reproduce el cómodo *impasse* de antes del 2000 al mantener dilatado el conflicto. Hace renacer “el gran mito de la historia colombiana: el estallido del espacio, la inmovilidad del tiempo, la condena a la repetición” (Pecaut: 1987, 19).

La crisis tiene dos impactos y dos dimensiones interna y externa sobre la política de seguridad, uno económico y otro político, que conllevan su encrucijada. El

---

Gobierno llega hasta la destitución de 27 oficiales, sin que se sepa qué pasó con la investigación interna, si fueron cómplices de esos asesinatos o si pecaron por omisión” (elespectador.com: 5 de mayo de 2009). Consultado el 7 de mayo.

<sup>7</sup> “Presidente Uribe no descarta impuesto permanente para financiar la guerra. *Tenemos que revisar con rigor el imperativo de la austeridad*, pidió el mandatario de los colombianos” (elespectador.com: 8 de mayo de 2009). Consultado el 10 de mayo de 2009.

<sup>8</sup> “Los cálculos del Ministerio de Hacienda dicen que entre 2007 y 2010, años en los que rige el impuesto al patrimonio (Ley 1111 de 2006), el país recaudará cerca de 8,5 billones de pesos (1,8 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB)” (elcolombiano.com: mayo 15 de 2009).

económico interno obliga al gobierno a limitar los recursos presupuestales para sostener los gastos del conflicto (ver cuadro), en buena parte financiado por el famoso impuesto al patrimonio diseñado en el 2006<sup>8</sup>, con vigencia hasta el 2010<sup>9</sup>.

**Presupuesto del Sector Defensa 2002-2009**  
Millones de pesos

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
10.459.056	11.841.842	13.436.093	13.086.278	15.044.406	17.870.369	22.270.644	23.916.967	21.120.000

Elaborado con base en el periódico *El Tiempo*, 2-1, mayo 11 de 2009, y *Financiero.com*. 2009.

Hasta el 2008 contaba el presupuesto de defensa con una participación promedio en el PIB del 4%, que se habría de mantener por un largo trecho dado el relativo éxito de la economía. Esas cuentas, por la recesión que acusa el país en el 2009, deben ser calculadas a partir de un crecimiento precario, que según los economistas se va a mover entre el 2% y 0% en los próximos años según el comportamiento económico mundial.

Políticamente el Estado está obligado a atender las variables económicas y sociales sobresaltadas por la situación, y burladas hasta entonces por estar concentrado en la guerra. La situación igualmente pone a prueba los fundamentos neoliberales y neoinstitucionales contenidos en el Plan de Desarrollo, y la capacidad real de gobernar del Presidente.

La situación ablanda el espíritu guerrista de los empresarios aliados (*cacaos*), que apoyan toda empresa que sea rentable, incluida la guerra, pero que lo piensan más de dos veces cuando se trata de ver disminuidas sus ganancias; de ahí que declaren que “no ven oportuna la idea de más impuestos” (*elcolombiano.com*: 2009). Muy seguramente se vean obligados a repensar la vía menos costosa, como lo es la negociación.

Contribuyen a esa situación de fisuramiento de la política de la Seguridad Democrática el amainamiento de los éxitos militares y los falsos positivos que desprestigian las fuerzas armadas, las divisiones preelectorales de los partidos aliados al seno del partido de la U y el embolate del referéndum preelectoral, así como los sobresaltos sociales que se empiezan a manifestar en los paros y marchas de diversos sectores sociales, unidos a la exigencia de cumplimiento de los pactos concertados en los famosos Consejos Comunitarios.

<sup>9</sup> “A pesar de las estrecheces fiscales, el proyecto de Presupuesto para el 2010 el Gobierno señala que mantiene el crecimiento del gasto social como lo demanda la Constitución y las leyes. Pero, ¡oh sorpresa!, de 68 billones, 7.7 corresponden a gastos en seguridad (Ministerio de Defensa, DAS, Policía, Fiscalía y otros). El argumento es que la seguridad corresponde al gasto social” (Giraldo: 2009, 5).

En el entorno internacional, esa condición no es menos alentadora a raíz de la pérdida del aliado incondicional en la Casa Blanca, el ex presidente George Bush (incapaz de dejarle aprobado el TLC), y su reemplazo por el demócrata Barack Obama, con quien se ve desdibujado el apoyo al Plan Colombia. El nuevo presidente norteamericano se replantea el papel de Estado en el manejo de los asuntos económicos y vislumbra un cambio en el tratamiento de los asuntos económicos y políticos con los países del hemisferio, incluido Colombia.

## 2. EL PORVENIR DEL PLAN COLOMBIA

Con el gobierno de los Bush los Estados Unidos no fueron ajenos a la Política de Seguridad Democrática al apoyar financiera y militarmente el Plan Colombia propuesto por Andrés Pastrana.

El plan original tuvo un presupuesto de US\$7,5 mil millones de dólares, de los cuales un 51% se dedicaría al desarrollo institucional y social, un 32% para combatir el narcotráfico, un 16% para revitalización social y económica y un 0,8% para apoyar los procesos de negociación política con los grupos guerrilleros. Pastrana inicialmente solicitó US\$4,864 mil millones de dólares provenientes de fondos colombianos (65%) y US\$ 2,636 mil millones a la comunidad internacional (35%).

El Plan había sido diseñado por y en el marco de los intereses de los Estados Unidos con el objetivo de la luchar contra las drogas y defender los Derechos humanos en el marco de esa lucha<sup>10</sup>.

Para la ejecución del Plan Patriota, capítulo militar del Plan Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe contó con la ayuda económica y militar del Presidente George Bush y la promesa de la firma del TLC, en pago el gobierno de la seguridad democrática abre el país a sus corporaciones transnacionales, permite su presencia militar y de inteligencia, y apoya incondicionalmente la invasión realizada por Bush a Iraq. Por ese acuerdo recibe inicialmente la ayuda militar de los Estados Unidos por 463 millones de dólares y mantiene el tope de la presencia extranjera de 400 militares y 400 contratistas en el país (Leal: 2006), número que aumenta el 9 de octubre de 2004 a 600 y 800, llegando en la actualidad al tope de 2.000 (Azzellini: 2005, 41).

Esa postura del gobierno norteamericano con el conflicto colombiano entra a ser cuestionada por el gobierno de Barack Obama a raíz de los acontecimientos económicos y políticos que se desprenden de la crisis económica mundial. De ahí que Estados Unidos disminuya en 33 millones de dólares como cumplimiento

---

<sup>10</sup> “El gobierno de Reagan en 1986 emitió una Directiva de Seguridad Nacional declarando al narcotráfico como una amenaza a la Seguridad de los Estados Unidos, la cual facilitaría la participación militar en la acción antidrogas allende las fronteras” (Esquivel: 2001, 179).

de los pactos acordados, lo que deja entrever que su apoyo hacia el futuro, entra en cuidados intensivos, tal como ocurre con el TLC.

De otra parte se debe tener en cuenta que desde antes del fin de la guerra fría, los Estados Unidos empezaban a dejar de manifestar su preocupación por el fantasma de comunismo, pues para entonces el presidente Nixon se acercó a la China comunista concertando acuerdos económicos y financieros, que son precisamente los que han contribuido al mantenimiento del poder del dólar. Ahora, cuando se trata de resolver su propia crisis esa actitud de distensión se hace más evidente para su pragmatismo al preferir tener socios que amigos y/o enemigos. De ahí que Obama no esté en las mejores condiciones para patrocinar guerras que no sean las que considere estrictamente necesarias; le son suficientes los costos de las guerras de Iraq y Afganistán<sup>11</sup> que arrastra como herencia de Bush<sup>12</sup>.

En ese marco se puede arriesgar la hipótesis según la cual el actual gobierno de los Estados Unidos está interesado en tener relaciones con regímenes políticos y socioeconómicos estables independiente de sus orientaciones ideológicas. Estados y regímenes que les garanticen el curso de sus negocios, que le ahorren el sostenimiento de conflictos ajenos, les detengan la emigración masiva y la exportación de las drogas. Por eso no son gratuitas sus declaraciones recientes en la cumbre de Trinidad y Tobago de respeto a la autodeterminación y su apertura hacia Cuba, como el reconocimiento de hecho de los diversos gobiernos latinoamericanos de izquierda allí presentes, que significa una real inflexión histórica en la política exterior norteamericana. Eso no niega que no sobrevivan y persistan las posiciones e intereses ultraconservadores anidados en el poder económico de la industria militar, el minero energético y financiero norteamericano, proclives a propiciar guerras<sup>13</sup> en cualquier parte del mundo y por cualquier motivo, en alianza con los sectores cipayos más reaccionarios.

La situación de violación de los derechos humanos, el mantenimiento del narcotráfico y de los cultivos ilícitos, objetivos del plan Colombia, son muestras

<sup>11</sup> “Además, la guerra en Afganistán forma parte de la Operación Libertad Duradera que no tiene límites temporales ni territoriales y que lucha contra una serie indefinida de posibles enemigos. (...) guerra que forma parte de las llamadas “nuevas guerras”, que son conducidas por diversos actores muchas veces no estatales y sin ningún tipo de regulación legal” (Azzellini: 2005, 18).

<sup>12</sup> “El gobierno de Bush dijo que la guerra costaría 50.000 millones de dólares. E.U. está gastando esa cantidad en Iraq cada tres meses. Además, el gobierno de Bush redujo los impuestos a los ricos al tiempo que se lanzaba a la guerra, pese a tener un déficit presupuestario.

A consecuencia de ello, ha tenido que recurrir a un exceso de gasto público –gran parte de él financiado desde el extranjero– para sufragar la guerra. Si no cambia la situación, la deuda nacional de E.U., que ascendía a 5,7 billones de dólares cuando Bush llegó a la presidencia, será dos billones de dólares mayor por la guerra (además del aumento en 800.000 millones de dólares durante el período de Bush anterior a la guerra)” (Stiglitz: 2008).

<sup>13</sup> “Ya Marx hacía referencia al hecho de que la función de la guerra en el capitalismo no solo se reduce a la conquista o a la usurpación de territorios extranjeros y de sus mercados, sus materias primas y su fuerza laboral, sino también comprende precisamente la destrucción sistemática y a menudo involuntaria de capital, con la cual de hecho se resolvieron las crisis de superproducción” (Azzellini: 2005, 20).

para el gobierno de Barack Obama del fracaso del Plan Colombia, que lleva a ponerle peros a su financiamiento. Eso unido a la distensión hemisférica hace que el dilatando conflicto colombiano por sus características resulte un problema de los colombianos, y no precisamente de su incumbencia en las prioridades.

Si a lo anterior unimos el hecho de que para la élite pudiente que ha contribuido con el impuesto de guerra, las expectativas de sus negocios no son las más halagüeñas para mantener esa máquina devoradora de recursos económicos, estos dos insumos van resultando el mejor ingrediente para obligar al país a pensar en serio y por cuenta propia el proceso de resolución por la vía de negociación del conflicto y, por tanto, la permanencia de la seguridad democrática y su pretensión de consolidarse como un régimen político.

Ante esa situación, el gobierno del presidente Uribe –que persiste en el conflicto– propone mantener con carácter permanente el impuesto a los *cacaos* en perspectiva de hacerlo extensible a toda la población, y busca acercamientos con Europa<sup>14</sup> y otros países lejanos para su financiamiento, pero por lo visto sin mayores resultados.

### 3. PORVENIR DEL CÓMODO IMPASSE

La política de Seguridad Democrática, que ha copado hasta la fecha nueve años de la historia política colombiana, se perfila *reducida, estrecha y simplista*.

Reducida porque persiste en desconocer, (como lo han hecho las políticas que le han precedido), la existencia de condiciones históricas objetivas económicas y sociales subyacentes al conflicto colombiano; donde es fundamental la resolución de la cuestión agraria. Estrecha al creer que la guerra sin fin puede resolver esos conflictos; y simplista, porque en su puesta en práctica reduce los actores del conflicto a las Farc, creyendo que su eliminación es la desaparición del conflicto, en un país que recicla como nuevos, las viejas violencias y actores.

La situación no es nada halagadora ni para el mantenimiento de la Política de Seguridad ni para el grueso de los colombianos, pues sus fisuras hacen suponer a las guerrillas que se están dando las condiciones objetivas que validan su lucha, manteniendo al país *per sécula*, en el cómodo *impasse* de la paz.

---

<sup>14</sup> “Colombia ha buscado apoyo adicional de la Unión Europea y otros países, con la intención de financiar el componente social del plan original, en un principio ha encontrado poca cooperación de los potenciales donantes de la ayuda debido a que estos tienen poca intención de invertir dinero en iniciativas que ellos consideran como inciertas, y además consideran que la ayuda militar que los Estados Unidos han proporcionado es indebidamente sesgada. Algunos países han enviado ayudas de unos cientos de millones de dólares (Aprox. US\$128,6 millones, 2,3% del total) pero la mayoría evitan ser públicamente asociados con el Plan Colombia, por lo tanto las sumas recogidas resultaron mucho más bajas de lo que inicialmente se había propuesto” (Wikipedia, 2009, consultada el 5 de mayo de 2009).

## BIBLIOGRAFÍA

- Azzellini, Darío, *El negocio de la guerra*, Berlín, Txalaparta, 2005.
- Caracol Radio, *El déficit de EE UU llegará a 1,2 billones durante 2009*, enero 7 de 2009, [www.caracol.com.co/nota.aspx?id=742592](http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=742592) (consultado el 15 de mayo de 2009).
- elcolombiano.com, *Los empresarios no ven oportuna la idea de más impuesto*, mayo 15 de 2009.
- elespectador.com, *Falsos positivos. ¿Cosas del pasado?*, abril 26 de 2009.
- , *Inversión extranjera ha aportado un punto al crecimiento de economía*.
- , *Presidente Uribe no descarta impuesto permanente para financiar la guerra*, sábado 8 de mayo de 2009.
- , *No más dictadura del positivo*, 5 de mayo de 2009.
- Isaza, José Fernando; Campos, Diógenes, “Juegos de guerra”, en *elespectador.com*, diciembre 19 de 2007 (consultado el 10 de mayo de 2009).
- elfinanciero.com, *El presupuesto colombiano en 2010 para la Seguridad y Defensa superará por primera vez al de Educación pese a que el dinero destinado a la política de...* [www.financiero.com/.../presupuesto-colombiano-2010-defensa-supera-por-primera-vez-a-educacion.asp](http://www.financiero.com/.../presupuesto-colombiano-2010-defensa-supera-por-primera-vez-a-educacion.asp) (consultado el 10 de noviembre de 2009).
- Esquivel, Ricardo, *Colombia Indefensa*, Bogotá, Espasa Hoy, 2001.
- García, Villegas, “El derrumbe de las Farc”, en *elespectador.com*, Bogotá, mayo 7 de 2008.
- Giraldo, César, “Presupuesto nacional 2010. Los recursos se quedaron cortos”, en *UN Periódico*, Bogotá D.C., Nº 127, domingo 25 de octubre de 2009.
- Leal Buitrago, Francisco, *La inseguridad de la seguridad Colombia 1958-2005*, Bogotá, Planeta, 2006.
- Muñoz, Altamiranda, “Fredy”, en [www.rebelion.org/noticia.php?id=61977](http://www.rebelion.org/noticia.php?id=61977) (consultado el 1 de mayo de 2009).
- Pecaut, Daniel, *Crónica de dos décadas de política colombiana: 1968-1988*, Bogotá, Siglo XXI, 1987.
- Richani, Nazih, *Sistemas de guerra*, Bogotá, Temas de Hoy, PRI, 2003.
- Stiglitz, Joseph E., “La guerra de los tres billones de dólares”, en *elespectador.com*, 7 Marzo 2008, [elespectador.com/.../columna-guerra-de-los-tres-billones-de-dolares](http://elespectador.com/.../columna-guerra-de-los-tres-billones-de-dolares).